

de 1997 sobre la financiación de la Iglesia católica húngara. En él se garantiza que las escuelas gestionadas por la Iglesia recibirán la misma subvención que las estatales. Este acuerdo remite en algunas cuestiones a la CE, tales como la financiación de la educación teológica superior, o la conservación del patrimonio. Para su seguimiento se creó una comisión mixta. Por otra parte, el Tribunal Constitucional también ha garantizado el cumplimiento de este concordato. Así lo hizo, enmendando la ley de salud que no permitía a la Iglesia crear institutos de asistencia social; y en otro caso en el 2008 consideró que la aportación a las escuelas católicas en el periodo 2005-2008 no había sido equitativa.

Concluye la obra con una referencia a la Comisión de Obispos en la Comunidad Europea, que nació en el año 80 y se desarrolló en la decena posterior. Esta Co-

misión pretende ser expresión de la colegialidad, estrechando así los lazos de unidad y de colaboración entre los obispos y la Santa Sede en las cuestiones pastorales que afectan a la Unión Europea. Los miembros son representantes de las Conferencias episcopales, lo que conlleva ciertas dificultades, ya que en algunos países hay dos CE –Inglaterra y Gales–, y en otros no existen –los escandinavos y Luxemburgo–. Se presentan los órganos de la COMECE, la comisión, el presidente, el comité ejecutivo y el secretario general. Se plantea la necesaria reforma de los estatutos de esta institución, pues desde su aprobación hace treinta años, la UE ha sufrido profundos cambios. El prof. Feliciani aporta bibliografía actualizada y accesible sobre el tema.

Diego ABOI RUBIO

---

**Victor G. D'SOUZA, (editor),** *In the Service of Truth and Justice, Festschrift in Honour of Prof. Augustine Mendonça, Professor Emeritus, Center of Canon Law Studies, St. Peter's Pontifical Institute, Bangalore 2008, 505 pp.*

El volumen que presentamos recoge diecisiete interesantes artículos escritos y presentados en homenaje al Prof. Augustine Mendonça, sacerdote de la diócesis de Montego (Jamaica), originario de Mangalore, India, y profesor titular de derecho canónico en la St. Paul's University de Ottawa durante más de veinticinco años. En su biografía, además de su amplia formación académica en Derecho

Canónico, teología y psicología, destaca el gran número de publicaciones: dos libros, más de cien artículos desde 1981, ocho capítulos en libros, veintidós reseñas y treinta y tres decisiones de la Rota y de la Signatura Apostólica traducidas al inglés. Además, ha supervisado más de veintiséis tesis doctorales en Derecho Canónico en St. Paul University, Ottawa.

En la presentación del volumen, el editor, prof. D'Souza, antiguo alumno del prof. Mendonça en Ottawa, y actualmente director del Center of Canon Law Studies en Bangalore, India, pone de relieve cómo el título *In the Service of Truth and Justice* (Al servicio de la Verdad y de la Justicia), resume adecuadamente la vida y el ministerio del prof. Mendonça. Asimismo subraya que durante sus años de intensa actividad académica en Canadá, el prof. Mendonça no ha dejado de mantener frecuentes y fructíferos contactos con el Center of Canon Law Studies de Bangalore y con la Conferencia Episcopal India. Esto explica, en parte, las cuatro «Laudatio» que inician también este volumen: la primera, del Card. Oswaldo Gracias, presidente de la Conferencia Episcopal India; la segunda, del Arzobispo de Mangalore (su diócesis de origen); la tercera, del rector de la St. Paul University; y la cuarta, del decano de la Facultad de Derecho Canónico de esta misma universidad.

El prof. Mendonça es un gran especialista en derecho matrimonial canónico y ha dedicado la mayoría de sus publicaciones a la jurisprudencia matrimonial en sus diversos aspectos. Sin embargo, los artículos que forman este homenaje no sólo versan sobre distintos temas de derecho matrimonial canónico, sino también sobre normas generales de derecho canónico y cuestiones canónicas relativas al sacramento del Orden y a la vida consagrada. Además, nos encontramos con un artículo de teología bíblica y otro de liturgia. Aunque en el volumen están

mezclados los temas, en esta recensión voy a presentar, en primer lugar, las contribuciones relativas a la jurisprudencia matrimonial.

*Defective Validations Revisited* («Revisando las validaciones defectuosas») [pp. 167-190] es el artículo de la prof. Lynda Robitaille, profesora asociada de Derecho Canónico en la St. Paul University y editora asociada de la revista *Studia Canonica*. Se plantea aquí la cuestión de qué sucede cuando un fiel sujeto a la forma canónica del matrimonio «contrae matrimonio» primero en una ceremonia no católica y más tarde expresa su consentimiento en una ceremonia católica. Analiza con detalle un decreto de la Signatura Apostólica del 23 de noviembre de 2005 y los dos comentarios al respecto del prof. Urbano Navarrete. Es importante probar la simulación total si la hubiera, para los procesos de nulidad. Como conclusión, subraya que es necesario demostrar no sólo que los jueces creen que el matrimonio es inválido, sino que las pruebas puedan ser claras para tribunales de otras instancias.

El P. Wojciech Kowal, O. M. I., profesor asociado de Derecho Canónico en la St. Paul University de Ottawa y actualmente vice-decano de la Facultad de Derecho Canónico, desarrolla el tema de *The Presumption of the Validity of Marriage* («La presunción de validez del matrimonio») [pp. 249-274]. El artículo se centra en la importancia de considerar la estructura lógica general de la argumentación en los casos de nulidad matrimonial para llegar a una correcta comprensión del can. 1060. Además,

presenta los presupuestos filosóficos subyacentes a los desafíos que plantea la presunción de validez del matrimonio. Como hilo conductor, recoge distintos discursos de Juan Pablo II a la Rota Romana, especialmente los de 1990, 2004 y 2005.

Anthony J. Malone, O. F. M., ex alumno del prof. Mendonça, nos presenta un interesante artículo sobre *The Role and Function of the Auditor: Historical Antecedents and Legislation* (pp. 275-298). Partiendo de un análisis del término «Auditor» y su aparición en distintos documentos, el autor se centra, en primer lugar, en la legislación sobre los auditores contenida en el Código de 1917. A continuación trata los cambios legislativos introducidos por la Instrucción *Provida Mater Ecclesia* de la Sagrada Congregación para los Sacramentos, publicada el 10 de septiembre de 1936. Posteriormente llegaron las denominadas «American Procedural Norms» (*Normae concessae Conferentiae Episcopali Statuum Foederatorum Americae Septentrionalis*) del 28 de abril de 1970, concedidas bajo la autoridad de Pablo VI, con el fin de agilizar los procesos de nulidad matrimonial. Con este mismo objetivo, Pablo VI escribió su Carta Apostólica *Causas matrimoniales*, el 28 de marzo de 1971, con normas para todos los tribunales de la Iglesia latina. Estos documentos son importantes para comprender el significado del can. 1428 del CIC de 1983, donde se describe la función del auditor, y los demás cánones relacionados con esta función. Es significativo, señala Malone, que la Instrucción *Dignitas Connubii* no

añade ni cambia nada de lo legislado por el CIC de 1983 en lo que se refiere al auditor.

Precisamente sobre temas relacionados con esta Instrucción versan los dos artículos que se publican a continuación. El primero, de Frederick C. Easton, con el título *The Judge and the Advocate: Keeping the Boundaries* («El Juez y el Abogado: manteniendo los límites») [pp. 299-321]. El autor, Vicario Judicial desde 1980, y presidente de la Canon Law Society of America en 1998, constata cómo desde la publicación de la Instrucción *Dignitas Connubii* se discute aún más acerca del papel activo del juez en los casos de nulidad matrimonial. Además, en los Estados Unidos y probablemente en otros países, es raro que los abogados de las partes sean titulados en derecho canónico. Así las cosas, se podría dar el caso de que las partes no tuvieran el consejo canónico suficiente, y el proceso pudiera resultar nulo y, en consecuencia, la sentencia sería también nula. El can. 1452 §2 del CIC, el can. 1110 §2 del CCOE y la Instrucción *Dignitas Connubii* en el art. 71 §2 se preocupan de esta cuestión. El autor cree que la legislación canónica es muy sabia cuando aconseja o requiere la presencia de expertos canónicos con el fin de ayudar a las partes principales en una causa matrimonial. En los tribunales en los que se le pide al juez que «supla la negligencia de las partes», existe el peligro de que con el tiempo, de alguna manera, se erosionen los límites éticos entre las funciones del juez y las del abogado. No hay que olvidar que la responsabilidad última de proporcionar un proceso equilibrado judicial-

mente corresponde al Obispo diocesano. De ahí la importancia de considerar la idoneidad de los miembros del Tribunal eclesiástico.

*The Pastoral Work of Judges According to Paul VI, The Code of Canon Law and Dignitas Connubii* (El trabajo pastoral de los jueces según Pablo VI, el Código de Derecho Canónico y la Instrucción *Dignitas Connubii*) [pp. 323-346] es un artículo de Patrick R. Lagges, Vicario judicial de la Archidiócesis de Chicago. El autor toma como punto de partida distintos Discursos a la Rota Romana de Pablo VI y de Pío XII en los que se trató el tema del ministerio pastoral de los jueces.

En el Código de 1983 la tarea pastoral del juez se define en varios momentos: antes de la aceptación del caso, en la organización del tribunal, en el proceso mismo, en relación con los que son admitidos al proceso, en el proceso, a la hora de decidir el caso. En síntesis, el autor considera que en este tema el CIC de 1983 sigue las líneas esbozadas por Pablo VI en sus discursos a la Rota Romana. La legislación vigente da al Obispo, al Vicario judicial y al Juez, una discrecionalidad considerable para establecer los tribunales y llevar a cabo un proceso, con el fin de poner la ley al servicio pastoral de los fieles.

Un último artículo relacionado con el Derecho matrimonial canónico es *The Canonical Form of Marriage Revisited: Did the Decree «Ne Temere» Outlast its Usefulness?* («Una revisión de la forma canónica del matrimonio: ¿ha dejado de ser útil el Decreto *Ne Temere*?») [pp. 347-364] de Roland Jacques, O. M. I. El autor insiste

en la necesidad de revisar la forma canónica del matrimonio para adaptarla a los tiempos actuales y a las diferentes culturas. Propone incluso una forma canónica alternativa que tuviera varios momentos: la preparación según los cann. 1063-1072, la manifestación del mutuo consentimiento fuera de la iglesia sin presencia del asistente mencionado en el can. 1108, y la bendición del sacerdote o del diácono en la iglesia dentro de una celebración litúrgica. Además, considera necesario ampliar las facultades de las conferencias episcopales mucho más allá de la literalidad del can. 1120.

Pasamos ahora a presentar dos artículos relacionados con el Sacramento del Orden. El primero, *Celibacy: An Ecclesiastical Imposition or Identification with Jesus Christ?* («El celibato: ¿una imposición eclesiástica o identificación con Jesucristo?») [pp. 191-214] es la aportación del Brendan Daly, Co-Vicario Judicial y Juez del Tribunal de la Iglesia Católica de Nueva Zelanda, y Juez del Tribunal de Apelación para Australia y Nueva Zelanda. El P. Daly hace un interesante recorrido histórico de cómo ha ido evolucionando la comprensión del celibato en la vida de la Iglesia. Comenzando por los datos bíblicos, siguiendo por los de la Iglesia primitiva, la legislación posterior de la Iglesia de Occidente, el Primer Concilio de Letrán, el Código Pío-Benedictino de 1917, y el Concilio Vaticano II, para llegar al Código de Derecho Canónico de 1983, no sin antes recoger brevemente la Carta Encíclica de Pablo VI *Sacerdotalis Caelibatus* de 1967, la Exh.

Apost. *Ultimis temporibus*, posterior al Sínodo de los Obispos de 1971 y también dos textos de Juan Pablo II: la carta *Novo Incipiente* del Jueves Santo de 1979, un texto de su primera Encíclica *Redemptor hominis* y otro de su Exh. Apost. *Familiaris Consortio*, concretamente el n. 16. Con posterioridad al CIC de 1983, dos documentos son particularmente importantes para este tema: concretamente, la Exh. Apost. *Pastores dabo vobis* también del Papa Juan Pablo II (1992) y la Exh. Apost. de Benedicto XVI, *Sacramentum Caritatis* (2006).

El segundo artículo sobre este Sacramento es *The Practical Application of the Canons on Irregularities and Impediments to the Reception of Orders* («La aplicación práctica de los cánones sobre irregularidades e impedimentos para la recepción del Sacramento del Orden») [pp. 215-247]. Su autor es Brian Dunn, profesor de Derecho Canónico en el Seminario St. Peter, London, Ontario, y Canciller y Vicario Judicial de la diócesis de London, Ontario. Nos presenta un análisis detallado de cómo es necesario aplicar los cann. 1041 y 1042 al escrutinio de los candidatos al Sacramento del Orden. Además, propone un cuestionario que puede ayudar a los encargados de verificar la idoneidad de los candidatos y la ausencia de impedimentos e irregularidades.

En esta serie de escritos en homenaje al prof. Mendonça hay también dos artículos interesantes relacionados con el derecho de los Institutos de vida consagrada, concretamente con los Capítulos generales. En primer lugar, Francis G. Morrissey, O. M. I.,

trata la cuestión de *The Role of General Chapters in Religious Institutes* (El papel de los Capítulos Generales en los Institutos religiosos) [pp. 139-166], a modo de ampliación de su contribución en el *Comentario Exegético de Derecho Canónico* de los cann. *De Capitulis* (cann. 631-633) (cf. vol. II, pp. 1580-1589). Aborda aquí algunos temas concretos referentes a la organización de los Capítulos, enfocándolos a la luz de los principios canónicos y de la jurisprudencia. Propone una serie de cuestiones para aplicar a los capítulos generales y otra para los capítulos provinciales. Trata también el tema del directorio del Capítulo y el manual para la convocación, desarrollo y conclusiones de dicho órgano de gobierno.

Un aspecto importante de los Capítulos generales es el que trata Elizabeth Cotter, IBVM: *Canon 631 and the Juridical Act*, («Canon 631 y el acto jurídico») [pp. 365-388]. Después de una breve panorámica histórica sobre los capítulos generales hasta llegar al CIC de 1983, la autora se plantea cómo determinar el status jurídico de los Actos que tienen lugar en un Capítulo general. Para ello estudia primero la potestad del Capítulo general y después los actos jurídicos, en general. Así puede aplicar estas nociones al can. 631, primero al §2, después al §1, y finalmente al §3. Concluye afirmando que es claro que los actos jurídicos de los Capítulos de Institutos clericales de derecho pontificio son actos jurídicos, mientras que los actos realizados en los Capítulos de los demás institutos religiosos son, en la práctica, también actos jurídicos, pero no es tan

claro que lo sean según la legislación vigente. La dificultad está en la comprensión del can. 129 §2, es decir, en definir qué significa la participación de los laicos en la potestad ejecutiva de régimen.

En esta colección de artículos encontramos también dos referentes a las «Normas generales» del Libro I del CIC de 1983. El primero trata ampliamente la cuestión de la validez de la delegación:

*The Efficacy of Delegation without Notification or Acceptance* («La eficacia de la delegación sin ser notificada o aceptada») [pp. 69-108]. John M. Huels, profesor ordinario de Derecho Canónico en la St Paul University de Ottawa, analiza la cuestión desde el punto de vista histórico y desde la doctrina canónica. Su punto de partida es la innovación que supuso en este punto el Código de 1917, ya que anteriormente los canonistas sostenían que la delegación no era válida hasta que fuera comunicada a la persona delegada y aceptada por ésta. El objetivo del artículo es determinar si, según la legislación canónica vigente, es suficiente que un delegado tenga la facultad para actuar válidamente o si el delegado tiene que ser notificado de la delegación y también aceptarla, para que su acto sea válido. Tras un amplio análisis de la doctrina, el prof. Huels concluye que ningún acto jurídico o litúrgico puede ser declarado inválido solamente por faltar la notificación al delegado de que se le había concedido la facultad necesaria para dicho acto; es decir, dicho acto se debe presumir válido.

El artículo *Singular Acts of Executive Power: An Examination of Title IV of Book*

*I of 1983 Code* («Los actos singulares del poder ejecutivo: un examen del Título IV del Libro I del Código de 1983») [pp. 389-424] de Valerian M. Menezes, es un interesante análisis de este tema; destacaría especialmente su estudio de los rescriptos -privilegios, dispensas- y la inclusión de la *licentia*, *facultas* e indulto en esta categoría de actos jurídicos. Como conclusión, el autor destaca que el Código de Derecho Canónico protege los derechos tanto de quienes tienen la potestad ejecutiva como de los receptores de los actos administrativos singulares al dar extensas normas al respecto. Así, la observancia de estas normas es un medio para proporcionar un cuidado efectivo de los fieles, que es esencial a la misión de la Iglesia; ésta no busca sólo el bien común, sino el bien individual de cada persona, sea física o jurídica.

Sobre el gobierno de la Iglesia y concretamente sobre la organización de las parroquias, trata el artículo *Consultation in the Parish: A Needless Burden, a Necessary Evil, or a Worthwhile Opportunity?* [pp. 109-138] de Anne Asselin, profesora de Derecho Canónico en la St. Paul University y Juez del Tribunal de Apelación de Canadá, nos ofrece un análisis de los órganos de consulta a nivel parroquial. Después de explicar el porqué de los órganos de consulta en el gobierno de la Iglesia, dejando claro que la Iglesia no es una democracia, se detiene en los cann. 536 y 537 del CIC que tratan, respectivamente, la cuestión del Consejo Pastoral Parroquial y la cuestión del Consejo Económico Parroquial. Aunque el can. 536

define al Consejo pastoral parroquial como un órgano facultativo, el Directorio para el Ministerio Pastoral de los Obispos *Apostolorum successores* del 2004, emanado por la Congregación para los Obispos, en el n. 210, indica que es «desearse» que cada parroquia tenga un consejo parroquial «a no ser que el pequeño número de feligreses sugiera otra cosa». Por otra parte, el Consejo de Asuntos económicos parroquial, según el can. 537, no es opcional sino obligatorio. La composición y los deberes del este Consejo están recogidos en los cann 1280-1288. Además, ambos consejos tienen carácter consultivo y no deliberativo, siendo la presencia del párroco necesaria en ambos Consejos para la validez de las decisiones y los actos realizados. La autora expresa la necesidad de que estos órganos de consulta funcionen adecuadamente en las parroquias y ofrece algunos criterios para lograr dicho objetivo; entre ellos, destaca la necesidad de una amplia y adecuada formación de los laicos.

En esta serie de escritos homenaje al prof. Mendonça nos encontramos también con un artículo de eclesiología y derecho canónico, «*Sensus fidelium*»- *Authority: Protecting and Promoting the Ecclesiology of Vatican II with the Assistance of Institutions?* [pp. 425-448] de Myriam Wijlens. La autora estudia el tema de la eclesiología del Vaticano II, especialmente LG 12, y su aplicación al Código de Derecho Canónico de 1983. Sorprendentemente, la autora subraya que en el Concilio Vaticano II hay dos teologías yuxtapuestas: la trinitaria y la cristológica;

además, no encuentra en el CIC de 1983 una aplicación de la teología trinitaria del Concilio Vaticano II, cuando, a mi juicio, es una de las claves de la eclesiología de comunión subyacente en la legislación actual.

En este sentido, William H. Woestman, O. M. I., en su artículo «*Summorum Pontificum*» and Ecclesial Unity («*Summorum Pontificum* y la unidad de la Iglesia») [pp. 449-465], sostiene que, respetando la diversidad de formas litúrgicas y de ritos, es esencial la conciencia de Iglesia, como pedía con fuerza el Papa Juan Pablo II en la Exh. Apost. *Christifideles Laici* (n. 30) y en otros muchos escritos de su Magisterio. Igualmente el Papa Benedicto XVI no ha dejado de pedir con urgencia que todos vivamos como miembros de la única Iglesia con un profundo sentido de comunión afectiva y efectiva. La Carta Apostólica *Motu proprio Summorum Pontificum* tiene como objetivo consolidar la unidad y la comunión de todos y entre todos los miembros de la Iglesia.

Un último artículo relacionado con temas de derecho canónico es el del prof. Victor G. D' Souza, editor de la publicación. Se trata de *General Principles Governing the Administration of Temporal Goods of the Church* («Principios generales que rigen la administración de los bienes temporales de la Iglesia») [pp. 467-498]. Es ciertamente un tema poco amable pero muy necesario para la vida de la Iglesia. El estudio parte del can. 1254 como base hermenéutica del libro V; revisa el concepto de «bienes eclesiásticos» (can. 1257) y la noción de «administración»

(cann. 1277 y 1281), para desarrollar después doce importantes principios para aplicar a la administración de los bienes temporales de la Iglesia. Por razón de brevedad, omito su descripción, pero quisiera destacar la necesidad de que estos principios, basados en la legislación vigente, sean puestos en práctica en todos los ámbitos de la vida de la Iglesia.

Como he comentado más arriba, en esta serie de escritos homenaje al prof. Mendonça hay también un artículo de un prof. de Sagrada Escritura, Walter Wogels, M.Afr. Aunque en el volumen es el primero que se presenta, lo he dejado para el final, como una buena síntesis de todos los temas y aspectos tratados en el resto de contribuciones. Se trata de *A Summary of the Law: «Love God...» (Dt 6:5)- «Love your Neighbour...» (Lev 19:18)*

(Una síntesis de la Ley: Amarás a Dios... (Dt 6,5) - «Ama tu prójimo...» (Lev 19,18) [pp. 43-67]. El autor, haciendo referencia a la Tòrah, nos recuerda que en los Evangelios sinópticos Jesús afirma que toda la Ley y los profetas se resumen en Dt 6,5 y Lev 19,18; por ello, también se podría decir que los 1752 cánones del Código de Derecho Canónico tienen su fuente en estas dos leyes del Antiguo Testamento. Con esta motivación, nos ofrece una exégesis de ambos textos, para concluir que la Ley es necesaria (Mt 5,17-19). «Todos necesitamos indicaciones para saber cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo. Este es el objetivo -concluye el P. Wogels- de las 613 leyes de la Torah y confío que también de los 1752 cánones del Código de Derecho Canónico».

María AREITIO

---

**Miguel FALCÃO**, *A Assistência Religiosa nas Forças Armadas e de Segurança. Legislação civil e canónica de 1940 a 2004*, Instituto Superior de Direito Canónico, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa 2008, 349 pp.

No contiene este volumen un estudio del tema de la asistencia religiosa militar en Portugal, sino una amplia recopilación de la normativa civil y canónica en este campo, en los sesenta y cinco años que subsiguen al Concordato de 7 de mayo de 1940 entre la Santa Sede y la República portuguesa. Del extenso título del volumen, es la segunda parte, Legislação, la que indica con precisión la finalidad de la

obra: ofrecer a los estudiosos la abundante legislación que a lo largo de ese importante período histórico ha constituido la base legal de la mencionada asistencia.

No resulta necesario poner de relieve la importancia de la asistencia religiosa, un derecho que forma evidentemente parte del derecho fundamental de libertad religiosa; la correspondiente Ley Orgánica española señala en su art. 2.3 que, «para la